



RESOLUCIÓN N° No 0 2 4 2 5 FEB. 2009

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, 37 del Decreto 564 de 2006, 1º del Decreto Distrital 191 de 2006 y 4, literal n del Decreto Distrital 550 de 2006, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

I. Que respecto del predio denominado Hacienda Altamira, Urbanización Unir II, ubicado en la Carrera 120 con Calle 74 C de la localidad de Engativá de esta ciudad, se expidieron los siguientes actos administrativos:

- Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, mediante la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C. aprobó el proyecto urbanístico Unir II (Predio hacienda Altamira) y su desarrollo por etapas, identificadas como I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, de acuerdo con lo establecido en los planos del proyecto urbanístico CU2-E 224/4-00 y CU2-E 224/4-01, concedió al señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, en calidad de propietario del predio, licencia de urbanización para la etapa I del desarrollo citado. (Expediente 01-2-0462).
- Resolución 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003, mediante la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. concedió a los señores JOSÉ LÓPEZ MENDOZA y otros, en su calidad de poseedores, licencia de urbanismo para la etapa VII y licencia de construcción para la manzana 8 de la misma etapa. (Expediente 03-4-0852).
- Resolución 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, mediante la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C. prorrogó el término de vigencia de la Licencia de Urbanismo contenida en la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, por un término de doce (12) meses solicitada por el señor MARIANO ENRIQUE PORRAS, en calidad de propietario del predio. (Expediente 03-2-1729).
- Resolución 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004, por la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. concedió al señor CAMPO ELÍAS PEÑA CRUZ y otros, en su calidad de poseedores, licencia de urbanismo para la etapa VIII y licencia de construcción para la manzana 9 de la misma etapa. (Expediente 03-4-2723).
- Resolución 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, mediante la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá concedió al señor JOSÉ ISAÍAS VARELA y otros, en su calidad de poseedores, licencia de urbanismo para la etapa IX y licencia de construcción para la manzana 10 de la misma etapa. (Expediente 04-4-0638).

2009



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

II. Que el 11 de mayo de 2006, bajo la radicación 1-2006-16028 la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C., solicitó al entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001 y 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, expedidas por la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., así como de las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003, 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., para el predio denominado Hacienda Altamira, Urbanización Unir II. (folios 1 al 6)

Los argumentos de la Comisión para solicitar la revocatoria directa de los actos descritos en precedencia, se concretan en:

- Que la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, expedida por la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., se otorgó a sabiendas de que se encontraba vigente una medida cautelar de embargo del predio del señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, razón por la cual la Curadora Urbana 2 de esta ciudad, debió citar al secuestre del predio, quien estaba encargado de la custodia material del inmueble, para que se hiciera parte dentro del trámite.
- Que no obstante existir una medida provisional de suspensión de la construcción del programa de vivienda Unir II, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 11 de octubre de 2002, en la Acción Popular 02-2514-01, la cual fue notificada a la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al entonces Director de Planeación Distrital, y al señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. continuó expidiendo licencias urbanísticas para el mencionado programa de vivienda.
- Que la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, aprobó áreas de estacionamientos en zonas de cesión del Distrito, en contravención de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, que prohíbe los estacionamientos en bahías públicas.

III. Que el 15 de agosto de 2006, mediante oficio 2-2006-19733, la entonces Gerencia de Trámites Administrativos de la Subdirección Jurídica del DAPD, solicitó al Curador Urbano 2 de Bogotá D.C., remitir los expedientes que contienen las actuaciones administrativas que derivaron en la expedición de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001 y 04-2-0106 del 21 de abril de 2004 (folio 8).

IV. Que el 25 de agosto de 2006, a través de la radicación 1-2006-30352, la Curaduría Urbana 2 remitió los expedientes 01-2-0462 y 03-2-1729, contentivos de las actuaciones que derivaron en la expedición de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001 y la 04-2-0106 del 21 de abril de 2004. (folio 9)

V. Que el 20 de noviembre de 2006, el Archivo Central de esta Entidad, remitió a la Subdirección Jurídica los expedientes 03-4-2723, 04-4-0638 y 03-4-0852 que contienen las



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

actuaciones administrativas que derivaron en la expedición de las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. (folio 10).

VI. Que el 21 de noviembre de 2006, la entonces Subdirección Jurídica de la entidad, mediante auto, inició el trámite de revocatoria directa y convocó a los titulares de las Resoluciones citadas en precedencia, para que si lo consideraban pertinente, se hicieran parte en la actuación administrativa (folios 11 al 15).

VII. Que el 24 de noviembre de 2006, mediante memorando 3-2006-08155, la Gerencia de Trámites Administrativos de la Subdirección Jurídica remitió los expedientes referidos, a la Subdirección de Planeamiento Urbano del DAPD – hoy Subsecretaría de Planeación Territorial, con el fin de solicitar los antecedentes, estudios existentes respecto de las mencionadas resoluciones y la realización del estudio técnico. Así mismo, solicitó a la Subdirección de Infraestructura y Espacio Público del DAPD, emitir concepto técnico bajo la radicación 3-2006-08163 del 24 de noviembre de 2006. (folios 17 y 246)

VIII. Que el 27 de noviembre de 2006, mediante oficio 2-2006-30586, se convocó al señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, para que se hiciera parte dentro del trámite, hiciera valer sus derechos y manifestara su consentimiento expreso y escrito sobre la revocatoria de los actos administrativos objeto de estudio. (folio 256)

IX. Que el 28 de noviembre de 2006, mediante auto, la Subdirección Jurídica de la Entidad, en consideración a que mediante Resolución 384 del 30 de noviembre de 2005, expedida por la Subdirección de Control de Vivienda del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, se ordenó la toma de posesión para la administración de los negocios, bienes y haberes de MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, convocó a la Caja de Vivienda Popular en su calidad de agente especial para la administración o liquidación de los negocios, bienes y haberes del señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, titular de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001 y 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, expedidas por la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C. (folios 30 a 32), con el objeto de que se pronunciara respecto del presente trámite, comunicación que se efectuó mediante la radicación 2-2006-31778 del 5 de diciembre de 2006 (folio 448 A).

X. Que el 1 de diciembre de 2006, mediante las comunicaciones 2-2006-31280 al 2-2006-31431 y el 4 de diciembre de 2006 con oficios 2-2006-31435 al 2-2006-31633, la Gerente de Trámites Administrativos convocó a los señores CAMPO ELÍAS PEÑA CRUZ, CLARA INES CASTELLANOS DE BOLÍVAR, RAQUEL LANCHEROS, ÁLVARO BARAJAS RINCÓN, SANDRA ELIANA TORRES, FERNANDO MAHECHA RINCÓN, YANETH ROCHA, ROSA VALBUENA, GERMÁN EDUARDO BERNAL, PAULO EMILIO CARDOZO, ELISEO MEDELLÍN VELÁSQUEZ, WILLIAM CASTAÑEDA, EMIRO MAHECHA, ELICEO TIJANO, RAQUEL LANCHEROS, MARÍA LILIA URRIAGO, DELVY ESPERANZA CHAPARRO, NORBERTO ÑUSTES LANCHEROS, TIBERIO MONROY JIMÉNEZ, HECTOR PIRATOVA SÁNCHEZ, YOLANDA YANETH BUSTAMANTE, BARBARA CHÁVEZ, MARTHA YANETH BOLÍVAR,



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

JOSÉ FRANCISCO VALERIANO, GLORIA INES BERNAL, FLOR MARINA BERNAL, ANA ELOISA PALMA GUZMÁN, BETTY LESMES PATIÑO, ALBA LUZ CASTAÑEDA GARCÍA, LUIS ALFONSO RAMOS, HECTOR ORLANDO MALAVER, SIXTA TULIA CÁRDENAS, ADELINA ROMERO, MARÍA ESPERANZA DÍAZ CARRILLO, JUAN DE DIOS DÍAZ, LUIS ALFONSO SALGADO, PEDRO PABLO PARRA PACHÓN, MARÍA CONCEPCIÓN MURCIA DE PARRA, CLAUDIA PATRICIA BOLÍVAR, ÁLVARO DEL CARMEN BARAJAS, GENARO APONTE, JAIME ALDEMAR CHÁVEZ, NESTOR ENRIQUE ROMERO, ANA SILVIA GARZÓN DE GALINDO, MARÍA ELVIRA MONROY, PATRICIA LEÓN, AGUSTÍN LUNA, ELIZABETH VARGAS ROMERO, BLANCA MARLENE GARCÍA, LUZ MARINA DE SILVA, MARIA DELIA PÁEZ, ERINI CRISTO, GLORIA MARÍA PARRA, MARY VILLEGAS, OLIVA CARDOZO CHACÓN, MARÍA FALCONERY RAMOS DE MORA, ARAMINTA NAVARRETE, JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ, MARÍA ETELBINA CASTIBLANCO, MILCIADES QUIÑÓNEZ DÍAZ, PEDRO MARÍA GORDILLO, GUSTAVO CÁRDENAS MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, ODILIA LOZANO, JOSÉ ANTONIO RIVERA, FABIO HERNÁN PIEDRA ROZO, HERMENCIA QUESADA, DANIEL DE JESÚS CABREJO ROLÓN, MARÍA ELISA LÓPEZ y ELPIDIO CASTAÑEDA, titulares de la Resolución 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004, por la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., otorgó licencia de urbanismo para la etapa VIII y licencia de construcción para la manzana 9 de la misma etapa. (Expediente 03-4-2723); JOSÉ ISAÍAS VARELA, SOFÍA GONZÁLEZ LUGO, MARY VILLEGAS RIVERA, MARIELA CANO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR MIRANDA, BERNARDA MORA, LIGIA MARTÍNEZ, GLORIA BOGOTÁ, JULIA MARGARITA BAUTISTA POLANÍA, AGUSTÍN LUNA, JOSÉ HELIODORO CIPRIAN BEJARANO, DELFINA VICTORIA HERNÁNDEZ, PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ, JANETH ESQUIVIA CORTES, BLANCA MARLENY GARCÍA BUITRAGO, CLAUDIA PATRICIA RINCÓN PINEDA, CLAUDIA PATRICIA BOLÍVAR CASTELLANOS, CLARA INES CASTELLANOS, ELIZABETH VARGAS, IMELDA RODRÍGUEZ, MARÍA ESPERANZA DIAZ CARRILLO, MEREJILDO SÁNCHEZ PÉREZ, CECILIA SÁNCHEZ, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ, JORGE DANIEL OCHOA ROJAS, PEDRO PABLO RIVEROS, MANUEL FRANCISCO GONZÁLEZ, VILMA TÉLLEZ BERNAL, ELBA FLOR RODRÍGUEZ FLORÍAN, JORGE ENRIQUE CASALLAS, NESTOR GERMÁN TORRES CASTRO, ARIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ARCENIO ANTONIO GONZÁLEZ, HERLINDA ESTHER PINO TINOCO, MARÍA EMMITA CRUZ, MIGUEL ANGEL SAAVEDRA, JORGE VANEGAS LUNA, MANUEL DAZA HUÉRFANO, MARCO AURELIO CENTENO, FLOR ALBA SÁNCHEZ, VERÓNICA TORRES VILLALBA, ALVARO DEL CARMEN BARAJAS, GUILLERMO ROLDAN CANO, JOSÉ EDITH ZABALA, HUGO HERNANDO VALDERRAMA, JOSÉ EVELINO PINTO, ELISEO TIJARO SAAVEDRA, JAIRO ELVER BOGOTÁ, JOSÉ SANTOS UNBARILA, CANDELARIA ESPITIA, VICTORINO ORTIZ, RAFAEL DANIEL FRANCO PEÑA, JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA, EDGAR BRAVO REYES, FRANCISCO ARTURO TRIANA, ELIODORO BUSTOS, DANIEL JOSÉ BEJARANO, AURELIANO CABREJO ROLÓN, HENRY UBALDO SOSA VARGAS, ROSALÍA DÍAZ RAMÍREZ, ALBA TULIA ÁLVAREZ BUSTOS, GLADYS PULIDO LÓPEZ, GRACIELA CASTRO FAJARDO, SANDRA PATRICIA LEÓN, ADELMO ÁLVAREZ BUSTOS, BLANCA MARLENY GARCÍA, EFRAÍN ALFONSO BELTRÁN, MARTHA CONSUELO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JEFERSON HERNANDO SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ PEDRO LARA ROJAS, SANDRA LILIANA



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

CLAVIJO MELÉNDEZ, GUSTAVO QUEMBA TÉLLEZ, CLARA INÉS CASTELLANOS DE BOLÍVAR, JOSÉ CAMILO DUARTE BARRERA, JUSTINA HOYOS VDA DE VALENCIA, SANDRA PATRICIA LEÓN, FERNANDO GORDO y JOSÉ ARNEY RAMÍREZ, titulares de la Resolución 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, mediante la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá concedió licencia de urbanismo para la etapa IX y licencia de construcción para la manzana 10 de la misma etapa. (Expediente 04-4-0638); y JOSÉ LÓPEZ MENDOZA, RAFAEL YEPES, MARÍA RUTH GÓMEZ DE MARTÍNEZ, MARÍA EMMA CELIS, ANA ROSA LÓPEZ VELÁSQUEZ, EDELMIRA MENDIVELSO, EDGAR ROMERO BACCA, LUIS ALBERTO LÓPEZ GARAY, LUIS ALBERTO ÁRIAS, MARÍA DEL CARMEN REYES, JOSÉ ARNEY RAMÍREZ, HERCILIA ROJAS BELTRÁN, ESTEBAN GILBERTO DÍAZ LINARES, MARÍA DE LA CRUZ OSORIO, EMMA ZULUAGA DE ZULUAGA, JAIR TORRES CARVAJAL, ORFILIA RUEDA SÁNCHEZ, WILMER FERNANDO SÁNCHEZ RAMÍREZ, NORBERTA NUSTES LANCHEROS, MARÍA FLOR ELISA QUIROGA CHÁVEZ, MARLENY CASTIBLANCO, MARÍA ELIZABETH GÓMEZ BLANCO, NUBIA JANETH MOLANO RICO, LUZ MERY RUIZ SUÁREZ, LUZ MARTHA SERRANO CONTRERAS, MARÍA ISOLINA GÓMEZ DE SALAMANCA, ROSA MARÍA REYES SALDAÑA, MARÍA DELIA PÁEZ NIÑO, ROBERTO LEAL VARGAS, JOSÉ HERNANDO CASAS ROJAS, MARTHA CECILIA DÍAZ GONZÁLEZ, ROSA ISMENIA VILLABONA, YOLANDA OTERO RIVERA, MARÍA GILMA MUÑOZ SAENZ, MARIO ALFONSO SÁNCHEZ, JOSÉ CAMILO DUARTE BARRERA, MARÍA CUSTODIA RÍOS DE GÓMEZ, ROSA HELENA LÓPEZ, GONZALO QUINTERO GUALTEROS, FABIO LEONARDO BARINAS CAÑÓN, BLANCA HILDA SABOYA LÓPEZ, BLANCA EDILMA SABOGAL DE RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR JUNCO SANABRIA, EDITH MANUELA CHIPATASIG GARCÍA, CIRO ALBERTO AGUDELO FUENTES, MARÍA AIDEE SIERRA BERNAL, VIDAL VIASUS CIPAMOCHA, ALBA ISABEL GARAVITO MARTÍNEZ, ARMANDO INFANTE, MARDOQUEO SALVADOR LINARES PEÑA, LUZ HERMINDA TORRES GONZÁLEZ, OSTIN JULIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ, LIDIA AMPARO CABRERA CIFUENTES, CONCEPCIÓN FORERO CASAS, MARÍA EDILMA GARCÍA, ANTONIO ASTUDILLO MORA, IVAN ANTONIO ACOSTA RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO ACERO CAMACHO, OLIVERIO GÓMEZ RÍOS, ROSALBA ROZO GONZÁLEZ, MARÍA RAQUÉL DURÁN DE BARRETO y ROSA HELENA CAMACHO PULIDO, titulares de la Resolución 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003, mediante la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. expidió licencia de urbanismo para la etapa VII y licencia de construcción para la manzana 8 de la misma etapa. (Expediente 03-4-0852), con el propósito de que se hicieran parte dentro del trámite y tuvieran la oportunidad de expresar su consentimiento sobre la revocatoria de los actos administrativos de los cuales son titulares. (folios 33 a 248)

XI. Que el 6 de diciembre de 2006, a través del memorando 3-2006-08542, la Subdirección Jurídica de la Entidad ordenó la publicación del Auto de inicio del trámite de revocatoria en un periódico de amplia circulación, lo cual se llevó a cabo el día 7 de diciembre de 2006 en el Diario La República. (folios 249 a 252).

XII. Que el 12 de diciembre de 2006, el señor WILSON CASTRO VELOZA, auxiliar administrativo de la Oficina de Correspondencia de esta Secretaría, certificó que luego de tres



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

(3) intentos, la correspondencia enviada al señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO se devolvió por cambio de domicilio del destinatario. (folio 258)

XIII. Que los días 12 de febrero y 17 de mayo de 2007, mediante el radicado 3-2007-03724, la Dirección de Trámites Administrativos requirió a la Subsecretaría de Planeación Territorial el concepto técnico solicitado. (folios 517 a 519)

XIV. Que el 12 de septiembre 2007, según memorando con radicación 3-2007-07121, (folios 520 a 524), la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP, rindió el concepto técnico solicitado, documento que hace parte integral del presente acto, en el que concluyó que el proyecto general aprobado por la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, no fue incorporado a la cartografía oficial del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, debido a inconsistencias en el trazado vial, razón por la cual se negó la incorporación de la etapa VII, lo que no fue óbice para que se incorporaran las etapas VIII y IX.

El informe técnico destacó que no hay evidencia documental de que el desarrollo sobre el terreno coincida con el proyecto general aprobado por la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C., situación similar ocurre con las etapas VIII y IX aprobadas por la Curaduría Urbana 4 de Bogotá, con las resoluciones 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, respectivamente. (folios 520 a 524)

XV. Que el día 25 de septiembre de 2007, según oficios 2-2007-30001 y 1-2007-30002, la Dirección de Trámites Administrativos de esta Entidad, dio traslado del concepto técnico al Gerente General de la Caja de Vivienda Popular, así como al Agente Especial para la Administración o Liquidación de los Negocios, Bienes y Haberes del señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, para que dentro de los tres (3) días siguientes al traslado se pronunciara si lo consideraba pertinente. (folios 526 y 527)

XVI. Que el día 25 de septiembre de 2007, según oficio 2-2007-29998, la Dirección de Trámites Administrativos de esta Entidad dio traslado del concepto técnico al señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, para que dentro de los tres días siguientes al traslado se pronunciara si lo consideraba pertinente, sin obtener respuesta alguna. (folio 528)

XVII. Que el 23 de octubre de 2007, el doctor VÍCTOR EDUARDO MEDINA JOHNSON, obrando como apoderado de la Caja de la Vivienda Popular, mediante memorial 1-2007-46547, solicitó se le reconociera personería para actuar. (folios 530 y 531)

XVIII. Que el 12 de junio de 2008, la Dirección de Defensa Judicial de la Subsecretaría Jurídica, certificó que esta Entidad no ha sido notificada de demanda alguna presentada contra las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C. (folio 541)



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

XIX. Que el 14 de enero de 2009, mediante escrito radicado 1-2009-01073, el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, remitió por competencia a esta Secretaría, el derecho de petición presentado por el señor FÉLIX CULMAN, mediante el cual solicita que de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 11 de octubre de 2002 y confirmada por el H. Consejo de Estado en decisión del 16 de octubre de 2008, se ordene la revocatoria de las licencias de urbanismo y construcción aprobadas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C. para el programa de vivienda UNIR II.

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

1. Cumplimiento de los requisitos formales para la solicitud de revocatoria directa.

1.1. Competencia de la SDP para avocar y decidir el trámite.

El parágrafo 1 del artículo 37 del Decreto Nacional 564 de 2006³, otorga a los curadores urbanos y a los alcaldes municipales o distritales o sus delegados, la decisión de fondo de los trámites de revocatoria directa de los actos administrativos que concedan o nieguen licencias urbanísticas.

A través del Decreto 191 de 2006, el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. asignó al entonces DAPD (hoy Secretaría Distrital de Planeación) la competencia para conocer, tramitar y resolver, de oficio o a solicitud de parte, las revocatorias directas de los actos administrativos mediante los cuales los Curadores Urbanos de Bogotá otorgan o niegan licencias urbanísticas.

1.2. Legitimidad para solicitar la revocatoria directa de actos administrativos mediante los cuales los Curadores Urbanos otorgan o niegan licencias urbanísticas.

El parágrafo 2 del artículo 37 del Decreto Nacional 564 de 2006, establece que para solicitar la revocatoria directa de los actos que resuelven las solicitudes de licencias urbanísticas, se encuentran legitimadas "las autoridades administrativas competentes" y particularmente el parágrafo único del artículo 1º del Decreto Distrital 191 de 2006, otorga competencia a la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas.

Por lo expuesto, el trámite de revocatoria directa se inició a solicitud de la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 1 del Decreto Distrital 191 de 2006.

³ "Artículo 37. De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo. Parágrafo 1. Contra los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos otorguen o nieguen licencias urbanísticas, procede la revocatoria directa ante el mismo curador o ante el alcalde municipal o distrital o su delegado, en los términos previstos en el Título V de la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (...)"



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

1.3. Procedencia.

El Código Contencioso Administrativo dispone como requisito de procedibilidad tendiente a la admisión de la solicitud de revocatoria directa, que se presente en relación con actos administrativos expedidos por autoridad competente, respecto de los cuales el solicitante no haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.

En el caso que nos ocupa, revisados los expedientes que dieron origen a las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C., la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, solicitante de la revocatoria directa, no interpuso contra las mismas los recursos de la vía gubernativa.

No obstante lo anterior, advierte esta Secretaría que mediante la Resolución E 06-4-0099 del 3 de marzo de 2006, obrante a folios 533 a 540 de la presente actuación administrativa, el Curador Urbano 4 Encargado de Bogotá D.C., arquitecto Mariano Pinilla Poveda, resolvió una solicitud de revocatoria directa presentada el 30 de noviembre de 2005 por el señor FELIX CULMAN contra las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por la Curaduría Urbana 4 de Bogotá D.C., en la que decidió no revocar los mencionados actos administrativos, por considerar que el peticionario no desarrolló debidamente su solicitud de revocatoria en alguna de las causales establecidas en el artículo 69 del C.C.A., y tampoco se videncia de los documentos y pruebas aportadas que para la expedición de los señalados actos administrativos se hubiesen empleado medios ilegales.

Consideró finalmente el Curador Urbano 4 Encargado, que la suspensión de obras ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no afecta las licencias urbanísticas expedidas por el citado Curador, ya que en su concepto ese no fue el alcance de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo, ni del Consejo de Estado.

Pese a lo anterior, dicho trámite de revocatoria no es óbice para que esta Secretaría estudie de fondo la nueva solicitud de revocatoria, como quiera que en primer término involucra otros actos administrativos expedidos para el predio Hacienda Altamira, Programa de Vivienda UNIR II y en segundo, porque el solicitante de la revocatoria en este evento, es la Comisión de Veedurías a la Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.

En ese orden de ideas, resulta procedente el estudio de fondo de la solicitud presentada por la Comisión, teniendo en cuenta la competencia legal que dicho organismo ostenta para solicitar la revocatoria directa de los mismos.

1.4. Oportunidad.

La solicitud elevada por parte de la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, así como el trámite de revocatoria directa que se adelanta con base en ella, se ajusta a lo dispuesto sobre



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

el particular por el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 809 del 6 de junio de 2003.

En ese sentido, la solicitud reúne las condiciones necesarias para ser estudiada, como quiera que la Secretaría Distrital de Planeación no ha sido notificada de ningún auto admisorio de demanda contra las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C., conforme a la constancia expedida el 12 de junio de 2008 por la Dirección de Defensa Judicial de la Entidad. (folio 541)

2. Análisis de fondo de la solicitud de revocación directa de los actos administrativos cuestionados.

2.1. Normatividad urbanística vigente al momento de presentar las solicitudes de licencias urbanísticas.

Las normas urbanísticas y arquitectónicas aplicables a las actuaciones que dieron origen a los actos administrativos cuya revocatoria directa solicita la Comisión de Veeduría a la Curadurías Urbanas, son las establecidas por el Decreto 344 de 2000 *"Por el cual se asigna el Tratamiento Especial de Incorporación a los predios rústicos denominados Granada, Santa Isabel, San Bernardo, El Porvenir y Hacienda Altamira, agrupados bajo el nombre de concertación del Sector Norte de Engativá"*.

Razón por la cual dichos actos se enmarcan en las normas del Acuerdo 6 de 1990, quedando cobijados por el régimen de transición establecido en el artículo 515 - num. 9 del Decreto 619 de 2000, y en el artículo 478 – numeral 9 del Decreto 190 de 2004 (compilación del POT).

Lo anterior, de conformidad con el estudio técnico realizado por la Subsecretaría de Planeación Territorial de esta Entidad y que hace parte integral de la presente decisión (oficio 3-2007-07121 del 9 de septiembre de 2007, folios 520 a 524).

2.2. En cuanto al cumplimiento de la normatividad urbanística.

La Subsecretaría de Planeación Territorial, se ocupo de efectuar el estudio técnico de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C., conceptuando lo siguiente:

Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, expedida por la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C.:

En relación con este acto administrativo, mediante el cual se aprobó el proyecto urbanístico del desarrollo denominado UNIR II (Hacienda Altamira), por etapas, se establecieron sus normas, se concedió licencia de urbanización para la Etapa I, el análisis técnico señaló que los planos



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

CU2-E-224/4-00 y CU2E-224/4-01, no fueron objeto de incorporación en la cartografía oficial de esta entidad por presentar inconsistencias en el trazado vial, lo que motivó su devolución a la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C., para que se hicieran los correspondientes ajustes, sin que a la fecha se hayan verificado, razón por la cual la Urbanización UNIR II, no cuenta con plano de proyecto general incorporado, por lo que se determina que las licencias posteriores no se tramitaran de manera adecuada.

Del estudio del expediente, se evidenció que dicho acto administrativo se confirmó por la misma Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C., al resolver el recurso de reposición mediante Resolución CU2-2002-035 del 18 de febrero de 2002 (folios 160 a 170 cuaderno 4/14 expediente 01-2-0462) y por el DAPD según la Resolución 0157 del 23 de abril de 2002, al resolver los recursos de apelación y queja, interpuestos contra la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001.

En las anteriores decisiones, se dilucidó la irregularidad evidenciada por la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, según la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C. no podía expedir licencia de urbanismo, porque sobre el predio objeto de la licencia pesaba una medida cautelar de embargo.

Sobre este punto, encuentra el Despacho que ni el Decreto Nacional 1052 de 1998, ni el Decreto Distrital 344 de 2000, normas aplicables al predio objeto de estudio, establecen impedimento para la expedición de la licencia de urbanismo por parte de los Curadores Urbanos, como quiera que los efectos de las licencias urbanísticas no inciden en los derechos reales de propiedad (dominio o posesión), sino sobre la legalidad urbanística, es decir la existencia de una medida cautelar no puede limitar la posibilidad de adelantar las actuaciones tendientes a la obtención de licencias.

Sobre el particular, la Resolución 0157 del 23 de abril de 2002, expedida por el entonces DAPD al resolver unos recursos de apelación y de queja apelación, (folios 1278 a 1296 expediente 01-2-0462 carpeta 9/14) señaló:

"(...)

Es decir que el hecho de existir una medida cautelar que pesa sobre un inmueble no constituye en manera alguna una causal o impedimento para que el Curador Urbano cumpla con su "función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción". (Artículo 36 del Decreto 1052 de 1998). Como consecuencia de esa verificación, puede negar o conceder la licencia solicitada. Así, es claro que con la expedición de la licencia ahora recurrida no se está interfiriendo el proceso de embargo y secuestro del bien objeto de la misma. Además, tampoco puede decirse que la Resolución No. CU2-2001-295 del 26 de Noviembre de 2001, constituye óbice para que se adelante la posible venta y remate del bien objeto de la licencia, con el fin de dar a cada uno de los ofendidos el valor de los perjuicios de que hayan sido víctimas.

BAU



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

Lo anterior, por la sencilla razón de que tal como lo advirtió la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C., en la Resolución No. CU2-2002-035 del 18 de febrero de 2002, "...el artículo 9 (Parágrafo Segundo) del Decreto 1052 de 1998 dispone que "La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más inmueble sy producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados" (Sublíneas y negrillas fuera de texto)"

Quiere decir lo anterior, que dicha resolución es la consecuencia del trámite adelantado por el señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO ante el entonces DAPD, que culminó con la autorización para incorporar el predio en referencia al desarrollo de usos urbanos, actuación que se enmarcó dentro de los parámetros del Decreto 344 del 4 de mayo de 2000 proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., mediante el cual se asignó el Tratamiento Especial de Incorporación al Predio Rústico Hacienda Altamira ubicado en el Área Suburbana de Expansión de la Localidad de Engativá.

Adicionalmente, se observa que a través del oficio 98-2-35071 del 23 de junio de 1998, el Subdirector de Expansión y Ordenamiento Territorial del entonces DAPD, acusó recibo del oficio 223 F-76 del 14 de mayo de 1998 expedido por el Fiscal Local 76 de Bogotá D.C., doctor ELIAD CÁRDENAS ROLÓN, a propósito de la solicitud de aclaración de las anotaciones 3 y 4 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1355521, en el cual se informó por parte de la Fiscalía que *"... la única limitante legal que tiene el predio (Hacienda Altamira) es que no se puede enajenar por la medida cautelar vigente"*. (folio 79 expediente 01-2-0462 carpeta 1/14).

En el mismo sentido, el numeral 2 del artículo 12 de la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, expedida por la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., advirtió que la venta de los lotes resultantes del proyecto es posible *"...únicamente si se levanta la limitante legal que tiene el predio, que no le permite enajenar por medida precautelar vigente"*. (folio 113 cuaderno 1/14 expediente 01-2-0462)

Resulta necesario destacar que por medio de la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, la Curadora Urbana 2 de Bogotá D. C., concedió licencia de urbanización para la etapa I, lo cual se constituye en una autorización para adecuar el terreno y la infraestructura para la prestación de los servicios públicos, más no para desarrollar edificaciones.

De otra parte, la providencia del 14 de junio de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección B, en la Acción Popular 02-2514-01, recogió lo expresado por el H. Consejo de Estado en Auto del 5 de noviembre de 2003, al confirmar la medida cautelar de suspensión de la construcción del Programa de Vivienda Unir II, expresó:

"... Desde este punto de vista, no se observa en el expediente que la actuación surtida por la curadora urbana No. 2 se aleje de los valores y principios insertos en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que ajustó su actuación a las normas aplicables al caso en estudio, sin desconocer la esencia de sus funciones ya que hizo un análisis objetivo de la solicitud presentada por el señor Mariano Enrique



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

Porras, haciendo caso omiso de situaciones que se alejaban de su competencia. Esto se da bajo el entendido que la ley 388 de 2007 y el decreto 1052 de 1998, normas que regulaban lo atinente a la expedición de licencias de urbanización y construcción no exigen como requisito para el otorgamiento de la licencia de urbanización que el bien sobre el cual se otorga esté libre de embargos o medidas similares, o que el solicitante se encuentre libre de cualquier imputación penal”.

De la anterior decisión se debe destacar que el Consejo de Estado no halló con la expedición de Resolución CU2-2202-295 del 26 de noviembre de 2001 para el predio Hacienda Altamira, que la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C, hubiese vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, no obstante confirmó la medida provisional de suspensión de la construcción del aludido programa de vivienda con el fin de garantizar el derecho colectivo de los consumidores, a la luz del artículo 78 de la Constitución Política.

Así mismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en providencia del 16 de octubre de 2007, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital de Bogotá y el señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 14 de junio de 2006, decidió “...Con base en lo anterior, en la expedición de la resolución CU2-2202-295 del 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se concedió licencia de urbanización para adelantar el proyecto denominado UNIR II Etapa 1, el Curador Urbano No. 2 **no vulneró ningún derecho colectivo**, en virtud de que su actuación, en cuanto a las imputaciones relacionadas por el demandante, estuvo ceñida a la reglamentación del Decreto 1052 de 1998..”

En consecuencia, observa el Despacho que la Resolución CU2-2001-295, expedida por la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C, fue solo una autorización para adecuar el terreno y para adelantar la infraestructura de servicios públicos, y en ese orden de ideas, cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes a la fecha de su solicitud, esto es al Decreto Nacional 1052 de 1998 y al Decreto Distrital 344 de 2000, último que incorporó el predio rústico al área urbana del Distrito Capital, por lo que los argumentos esgrimidos por la Comisión de Veedurías de las Curadurías Urbanas en este punto no están llamados a prosperar.

- Resolución 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, mediante la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C. concedió prórroga al término de vigencia de la Licencia de Urbanismo expedida según Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001

Concomitante con lo señalado en precedencia, se debe resaltar que la misma justificación legal se aplica respecto de la Resolución 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, mediante la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C. concedió prórroga al término de vigencia de la Licencia de Urbanismo expedida según la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001 para el proyecto en mención, por un término de doce (12) meses, solicitada por el señor MARIANO



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

ENRIQUE PORRAS, en calidad de propietario del predio, pues dicha prórroga solo aplicaba para adecuación del terreno y para la infraestructura de servicios públicos del predio, acto administrativo que por demás, en el parágrafo del artículo primero, dispuso:

"PARÁGRAFO: El presente Acto Administrativo no autoriza la construcción del programa de vivienda Unir II, mientras continúe vigente la medida cautelar de suspensión de obras en la Urbanización Unir II, decretada en la Acción Popular No. 02-2514 que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Cuarta- Subsección B." (Subrayado nuestro)

- Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre 2003, 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-1137 del 7 de diciembre 2004, expidas por el Curador Urbana 4 de Bogotá D.C.:

Al respecto el informe técnico proferido por la Subsecretaría de Planeación Territorial, precisó que como quiera que el plano del proyecto general aprobado por la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C., fue objeto de observaciones por parte del entonces DAPD al momento de su incorporación en la cartografía oficial, estas nunca fueron subsanadas, y no fue posible revisar la concordancia urbanística de las licencias aprobadas por la Curaduría Urbana 4 de Bogotá D.C., con el proyecto general, advirtiendo además que se evidenciaron inconsistencias en materia vial y en áreas públicas, toda vez que se plantearon los estacionamientos en zonas de cesión al Distrito.

De otra parte, se examina que las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre 2003, 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-1137 del 7 de diciembre 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. otorgaron licencia de urbanismo para algunas etapas y licencia de construcción para otras, las cuales desconocieron la orden impartida por el citado Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, Magistrada Ponente doctora NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA, quien en Auto del 11 de octubre de 2002, dentro del trámite de la acción popular 2-2514 instaurada por el señor REINALDO VILLALBA VARGAS, en representación del Colectivo de Abogados JOSÉ ALVEAR RESTREPO, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C., dispuso:

"(...)

CUARTO. DECRÉTASE la medida cautelar solicitada por la parte accionante. En consecuencia, se ordena la inmediata suspensión de la construcción del programa de vivienda UNIR II por el daño que causa y puede seguir causando si se sigue con la construcción referida, para el oficiarse a los accionados".
(Subrayado y negrillas fuera de texto).

Medida cautelar que fue objeto de recurso de reposición, el cual fue confirmado por el H. Consejo de Estado, según Auto del 5 de noviembre de 2003.

BAEP



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

En este punto conviene advertir que en la sentencia de primera instancia del 14 de junio de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el numeral 8.19 de la parte considerativa, expresó:

"(...)

De otra parte, debe resaltarse que hasta la fecha del auto por medio del cual se admitió la demanda, en el cual se decretó la medida cautelar, 11 de octubre de 2002, el desarrollo UNIR II, diferente a la de la Etapa I, no contaba con otras licencias de urbanización y de construcción, con lo cual se demuestra que las siguientes licencias expedidas por el CURADOR URBANO No. 4 GERMÁN RUIZ SILVA, son ilícitas en cuanto que contravienen la orden judicial de suspensión de las obras de construcción emanada del tribunal y confirmada por el Consejo de Estado.

(....)

RESUELVE

PRIMERO. NÍEGANSE las pretensiones de que tratan los literales b), c) y f) de la demanda. **DECLÁRESE** que no se encuentra probada la violación al derecho colectivo a la MORAL ADMINISTRATIVA, por parte de la CURADORA URBANA NO 2, **BRIANDA RENIS CABALLERO**, como tampoco por parte del DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL, y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU". **CONCÉDASE EL AMPARO** a los derechos colectivos DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y A LA REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. En consecuencia, **ORDÉNASE** la suspensión de las licencias de urbanización como las de construcción sobre el desarrollo urbanístico UNIR II, hasta tanto el demandado **MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO** como todos los afectados y expectantes adquirentes del plan de vivienda a ejecutarse en el predio ALTAMIRA, de la localidad de ENGATIVÁ, DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, acrediten el lleno de los requisitos legales para el efecto respectivo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

(...)

TERCERO. COMPÚLSENSE copias de las piezas procesales de que da cuenta la parte motiva de este fallo para ante la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA para que investigue el delito en que pudo incurrir el **CURADOR URBANO No 4, GERMAN RUIZ SILVA** por desacato a la decisión judicial adoptada en el auto del 11 de octubre de 2.002. (...)"

BAJ.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

El anterior fallo fue objeto de impugnación ante el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Corporación que mediante providencia del 16 de octubre de 2007, modificó dicha sentencia, ordenando en el numeral tercero de la parte resolutive:

(...)

TERCERO. COMPÚLSENSE copias de la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que si a bien lo tienen, adelanten las actuaciones correspondientes."

Igualmente, modificó los numerales 4, 5 y 6 al advertir que frente a la medida cautelar decretada existió omisión en la vigilancia de las autoridades administrativas distritales, ya que pese a la suspensión del proyecto, se estableció la existencia de construcciones, lo cual fue evidenciado en la inspección judicial y en el peritaje ordenado por el Tribunal en el predio Hacienda Altamira.

Finalmente, el Consejo de Estado, expresó:

"SEXTO: Si el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección B, lo considera necesario, inicie incidente de desacato en los términos del artículo 41 de la ley 472 de 1998."

De las anteriores piezas procesales, se desprende que las resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C, expresamente desatendieron la decisión judicial que prohibió la suspensión de la construcción en la Urbanización UNIR II, e implícitamente la autorización para hacerlo a través de licencias urbanísticas, a partir del 11 de octubre de 2002, medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca comunicada a la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., al señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, lo cual se establece de los memoriales presentados por éstos en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión a que se hace alusión en las respectivas decisiones judiciales (folios 1667 a 1683 del expediente 02-2-0066 carpeta 14/14, de la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C).

Así mismo, obra a folio 1198 del expediente 01-2-0462 10/14, de la Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C., que mediante oficio 03-2-0161 del 3 de marzo de 2003, la arquitecta BRIANDA RENÍS CABALLERO, en su calidad de Curadora Urbana 2, informó a los Curadores Urbanos 1,3, 4 y 5 de esta ciudad, que:

(...)

Mediante Auto de fecha 11 de octubre de 2002 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el Artículo Primero, **admitió** la Acción Popular instaurada por la



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS, en contra de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ o quien haga sus veces y contra la CURADURÍA URBANA 2, por la expedición de la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, proferida por esta Curaduría Urbana y de la Resolución 0157 del 23 de abril de 2002, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

En el mismo Auto, en el Artículo Cuarto, se decretó como medida cautelar, "ordenar la inmediata suspensión de la construcción del programa de vivienda UNIR II por el daño que causa y que puede seguir causando"..."

(Negrilla fuera de texto)

Por tal razón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B en decisión del 14 de junio de 2006, calificó dichas resoluciones de: *"ilícitas en cuanto que contravienen la orden judicial de suspensión de las obras de construcción emanada del tribunal y confirmada por el Consejo de Estado"*. (folio 455)

En consecuencia, este Despacho procederá a remitir copia de la presente decisión al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección B, para su conocimiento⁴.

Concepto rendido por la Subsecretaría de Planeación Territorial el 12 de septiembre de 2007.

El informe técnico rendido por el Subsecretario de Planeación Territorial de esta Entidad, en relación con los actos administrativos objeto de estudio, concluyó:

"El proyecto general aprobado por la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, no fue incorporado a la cartografía oficial del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, razón por la cual se negó la incorporación de la etapa VII, pero que no fue óbice para que se incorporaran las etapas VIII y IX, advirtiendo sobre la falta de claridad con respecto al proyecto urbanístico.

La Resolución RES 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, mediante la cual se concedió prórroga al término de la licencia concedida por la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, quedó sin vigencia a partir del 14 de mayo de 2005, razón por la cual no es posible conceder nuevas prórrogas; y en su lugar será indispensable gestionar de nuevo la aprobación del proyecto urbanístico ante la curaduría urbana.

⁴ "ARTICULO 41. **DESACATO.** La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo."



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

Por otra parte, al no tener vigencia las resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, RES 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, y RES 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003, deberá establecerse jurídicamente si en tal circunstancia es procedente solicitar sus respectivas revocatorias.

Compete a las autoridades de vigilancia y control establecer el cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador responsable y, por ende, deducir si se configuró la causal de revocatoria prevista en las resoluciones mencionadas, en concordancia con el artículo 524 - literal C, del Acuerdo 6 de 1990. Se observa que en el material disponible para efectos del presente estudio, no hay registros del grado de desarrollo urbanístico alcanzado en el predio denominado Hacienda Altamira, el cual puede apreciarse someramente en la siguiente imagen satelital:

(...)

Tampoco hay evidencia documental de que el desarrollo sobre el terreno coincida a cabalidad con el proyecto general aceptado por la Curaduría Urbana N° 2. Idéntica situación se presenta en relación con las etapas VIII y IX aprobadas por la Curaduría Urbana N° 4, cuyas resoluciones RES 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y RES 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, respectivamente, se encuentran vigentes y cuyas posibilidades de revocatoria también están sujetas al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en cada una de dichas actuaciones.

Por tratarse de un desarrollo que no tiene origen ilegal o clandestino⁵, de ser revocadas las actuaciones de las Curadurías Urbanas N° 2 y N° 4 en relación con la Urbanización UNIR II - Hacienda Altamira, no es posible acceder a la legalización de las intervenciones que se adelantaron sobre el mismo⁶. En tal caso, únicamente será posible tramitar la aprobación de un nuevo proyecto general, bajo los parámetros normativos del Plan de Ordenamiento Territorial, según lo establecido en los Decretos 190 de 2004 (compilación del POT), y 327 de 2004, reglamentario del tratamiento de desarrollo urbanístico⁷, previa gestión del correspondiente plan parcial en virtud de su localización en el sector normativo 6 – área urbana integral, zona residencial sujeta al tratamiento de desarrollo, de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 73 – GARCES NAVAS.”

En cuanto al fundamento jurídico para que este Despacho pueda revocar actos que como las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del

⁵ Según sus antecedentes, el predio Hacienda Altamira fue parte de la concertación Engativá Norte, que culminó con la expedición del Decreto 344/00 mediante el cual dicho predio fue incorporado al suelo urbano del Distrito y obtuvo normas para su desarrollo por urbanización.

⁶ Según se define en el art. 458 del Decreto 190/04 (art. 495 del Decreto 619/00), el procedimiento de legalización está destinado a los desarrollos humanos realizados clandestinamente.

⁷ Según el art. 479 – num.2, del Decreto 190/04 (art. 284 del Decreto 469/03), vencido el término de un año contado a partir de la publicación de la revisión del POT, en caso de que no se construyan las obras de urbanismo durante el término de vigencia de la respectiva licencia, el desarrollo de los predios se efectuará con base en las normas contenidas en dicha revisión del POT y en los instrumentos que lo desarrollen.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C., sin el consentimiento expreso y escrito de sus titulares.

En relación con la posibilidad de revocar actos administrativos que tengan efectos particulares y concretos, el artículo 73⁸ del C. C. A. señala que tales actos no pueden ser objeto de revocatoria, sin contar con el consentimiento expreso y escrito de sus titulares; sin embargo, el inciso segundo del citado artículo, por excepción, prevé esa posibilidad sin el precitado beneplácito, en los siguientes eventos:

- Cuando resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo⁹, si se dan las causales previstas en el artículo 69¹⁰ del C. C. A.
- **Si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.**

En relación con las excepciones consagradas en el inciso segundo del artículo 73 del C.C.A, la Jurisprudencia unificada del Consejo de Estado mediante sentencia de interés jurídico¹¹, expresó:

"(...)

La interpretación que hizo la Sala del artículo 73 del C. C. A. sólo contempló la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se derive del silencio administrativo positivo, planteamiento que revisa la sala en esta oportunidad, pues una nueva lectura del citado artículo 73 del decreto 01 de 1984 permite ampliar el alcance que otrora (sic) señaló esta corporación y llegar a una conclusión diferente.

(...)

Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad

⁸ "ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

⁹ Previsto en el artículo 41 del C. C. A.: "ARTÍCULO 41. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. ... Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación. ... El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74." (Negrillas y subrayas fuera de texto)

¹⁰ "ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: ... 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. ... 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. ... 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

¹¹ Consejo de Estado - Consejero Ponente Dra.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO - Fecha: Julio 16 de 2002- No. de Rad.: IJ-029-02.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

semántica, utiliza la expresión "actos administrativos", para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.

Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.

(...)

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A.
(...)"

De la lectura del extracto transcrito, puede inferirse que aunque nuestra legislación consagra el principio de inmutabilidad de los actos de contenido particular y concreto, la administración ostenta la facultad de retirar del ordenamiento jurídico tales actos, sin el consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular, referida estrictamente a la ocurrencia de los dos supuestos de hecho establecidos en el artículo 73 del C.C.A.

En el segundo evento, es decir cuando el acto ocurre por medios ilegales, de conformidad con los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, debe tratarse de una maniobra fraudulenta, de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita, debidamente probada, cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico. Luego, no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los

Blay



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca, ni tampoco del acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la Ley.

El principio de inmutabilidad o intangibilidad de los actos administrativos de contenido subjetivo consagrado en el artículo 73 del CCA, encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, en el respeto de los derechos adquiridos, en la presunción de legalidad y en el principio de buena fe que debe reinar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Sólo cuando es evidente el despliegue de una conducta ilícita, que además de romper con la legalidad del acto, haya defraudado la buena fe que se presume en el obrar del particular frente a la administración, podrá ésta, aún sin el consentimiento escrito y expreso de aquel, invalidar el acto y retirarlo del mundo jurídico, ya que en este evento es claro que no habrá lugar a la consolidación de derechos, ni tampoco a la protección de la confianza legítima.

Corolario de lo anterior, la Administración solamente puede revocar un acto administrativo sin el consentimiento expreso y escrito del titular de los derechos de carácter particular y concreto reconocidos en él, cuando del estudio de la actuación administrativa se infiera sin lugar a dudas que la expedición del acto ocurrió por alguno de los vicios de la voluntad, esto es, error, fuerza o dolo, bien que recaiga sobre el objeto de la actuación o respecto de cualquiera de los sujetos que en ella intervinieron.

Por consiguiente, y en un claro respeto por el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de los titulares de las licencias que son ahora enervadas, mediante Auto del 21 de noviembre de 2006, la entonces Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital dio inicio al trámite de revocatoria de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C., y en ese orden se dispuso convocar a los señores MARIANO ENRIQUE PORRAS, BUITRAGO, JOSÉ LÓPEZ MENDOZA, CAMPO ELÍAS PEÑA CRUZ, JOSÉ ISAÍAS VARELA y otros, antes debidamente relacionados en su calidad de titulares de los actos administrativos en estudio, a sus últimas direcciones de residencia, al igual que mediante Auto del 28 de noviembre de 2006, se convocó a la Caja de Vivienda Popular como Agente Especial para la administración o liquidación de los negocios, bienes y haberes del señor MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO.

Sin embargo, pese a haberse convocado a los titulares de las licencias urbanísticas vía correo certificado para que se hicieran parte en la presente actuación administrativa, estos no concurrieron por lo que esta Entidad procedió a publicar en la edición del 7 de diciembre de 2006 del Diario La República, el edicto del 21 de noviembre de 2006, sin que ninguno de los titulares de las decisiones analizadas interviniera en la actuación administrativa.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

Igualmente, el doctor VÍCTOR EDUARDO MEDINA JOHNSON, representante de la Caja de Vivienda Popular, no se pronunció a pesar de manifestar su interés en intervenir en el trámite de revocatoria directa.

Ahora bien, atendiendo a lo previsto en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo y las orientaciones jurisprudenciales expuestas por el H. Consejo de Estado, en la sentencia de interés jurídico IJ-029 del 16 de julio 2002, Consejera Ponente doctora ANA MARGARITA OLAYA FORERO, no es procedente la revocatoria directa de las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., pues si bien es cierto el informe expedido por la Subsecretaría de Planeación Territorial de esta Entidad, evidenció inconsistencias de orden técnico, no configuran los elementos necesarios para derivar de ellas un medio ilegal.

En relación con el posible desacato, el Consejo de Estado en la parte considerativa de la providencia del 16 de octubre de 2007, señaló que al estar demostrado dentro del proceso que se continuó con el desarrollo del proyecto y la expedición de licencias de construcción, el Tribunal Administrativo debió iniciar el respectivo incidente de desacato regulado en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, como quiera que se vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas con la expedición de las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., arquitecto GERMAN RUIZ SILVA.

No obstante lo anterior, no es posible para este Despacho deducir que las mencionadas Resoluciones cuya revocatoria se impetra, hayan resultado por la ocurrencia de medios ilegales con entidad para viciar la libre manifestación de la voluntad del particular que en ejercicio de funciones públicas las expidió, requisito señalado en el inciso 2º del artículo 73 ibídem, para revocar directamente los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento expreso y escrito del titular.

Adicionalmente, es importante destacar que revisados los expedientes que culminaron con la expedición de los referidos actos, no resulta posible deducir indicio o elemento de prueba que permita determinar que en dicha actuación se hayan ejercido maniobras demostrativas de la existencia de error, fuerza, o dolo por parte del Curador Urbano 4 de la ciudad, ni de los titulares, que hayan podido viciar la voluntad de la administración al expedir las pluricitadas licencias urbanísticas.

Contrario sensu, cuando se ha establecido que los actos proferidos por el entonces Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., se oponen a la Constitución y a la ley, al tenor de la causal primera del artículo 69 del C.C.A., es condición *sine qua non*, para la revocatoria directa del acto, conforme lo dispone el primer inciso del artículo 73 del C.C.A., el consentimiento expreso y escrito del titular, el que en este evento no se contó, comoquiera que los titulares de las licencias urbanísticas no se pronunciaron.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

Por último, en relación con la Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, mediante la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., aprobó el proyecto urbanístico denominado UNIR II (Predio Hacienda Altamira) y su desarrollo por etapas, identificadas como I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, no se evidencian medios ilegales en cuanto a la expedición del acto en sí mismo considerado, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la acción popular 02-2514-01, fallo del 14 de junio de 2006, confirmado por el H. Consejo de Estado en Auto del 5 de noviembre de 2003 y sentencia del 16 de octubre de 2007, al establecer que las actuaciones de la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C., no se alejaron de los valores y principios del ordenamiento jurídico y que su actuación se ajustó a las normas aplicables al caso objeto de estudio, misma premisa debe aplicarse a la Resolución 04-2-0106 de 21 de abril de 2004, mediante la cual misma Curadora Urbana 2, concedió prórroga al término de vigencia de la mencionada Licencia de Urbanismo.

En conclusión, no se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo para la revocación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que: - las licencias urbanísticas cuya revocatoria se solicitó por la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas de Bogotá, no fueron el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo; - no se logró obtener por parte de sus titulares el consentimiento expreso y escrito para su revocatoria - en las actuaciones que las Curadurías Urbanas 2 y 4 adelantaron para expedir los referidos actos administrativos, no existe prueba alguna que permita evidenciar, una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita de la administración o del particular interesado, razones todas para determinar que el trámite de revocación directa impetrada, será resuelta en forma desfavorable a la solicitante.

Finalmente, en atención a lo consignado en el informe técnico expedido por la Subsecretaría de Planeación Territorial de esta Entidad, el cual hace parte integral de este acto, las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., perdieron su vigencia y: *"... por tratarse de un desarrollo que no tiene origen ilegal o clandestino"¹², en relación con la Urbanización UNIR II - Hacienda Altamira, no es posible acceder a la legalización de las intervenciones que se adelantaron sobre el mismo¹³. En tal caso, únicamente será posible tramitar la aprobación de un nuevo proyecto general, bajo los parámetros normativos del Plan de Ordenamiento Territorial, según lo establecido en los Decretos 190 de 2004 (compilación del POT), y 327 de 2004, reglamentario del tratamiento de desarrollo urbanístico¹⁴, previa gestión del correspondiente plan*

¹² Según sus antecedentes, el predio Hacienda Altamira fue parte de la concertación Engativá Norte, que culminó con la expedición del Decreto 344/00 mediante el cual dicho predio fue incorporado al suelo urbano del Distrito y obtuvo normas para su desarrollo por urbanización.

¹³ Según se define en el art. 458 del Decreto 190/04 (art. 495 del Decreto 619/00), el procedimiento de legalización está destinado a los desarrollos humanos realizados clandestinamente.

¹⁴ Según el art. 479 – num.2, del Decreto 190/04 (art. 284 del Decreto 469/03), vencido el término de un año contado a partir de la publicación de la revisión del POT, en caso de que no se construyan las obras de urbanismo durante el término de vigencia de la respectiva licencia, el desarrollo de los predios se efectuará con base en las normas contenidas en dicha revisión del POT y en los instrumentos que lo desarrollen.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

parcial en virtud de su localización en el sector normativo 6 – área urbana integral, zona residencial sujeta al tratamiento de desarrollo, de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 73 – GARCES NAVAS”.

En efecto, en relación con la vigencia de las licencias, el artículo 24 del Decreto Nacional 1052 de 1998, norma vigente al momento de la expedición de los actos administrativos, (disposición recogida en el artículo 41 del Decreto Nacional 564 de 2006) estableció:

“Artículo 41. Vigencia de las licencias. Las licencias de urbanización, parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas.

Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y construcción, éstas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogable por un período adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria”.

En virtud de lo anterior, y revisadas las vigencias de los actos administrativos estudiados, se determina que se encuentran vencidas, conforme a la siguiente cronología:

- Resolución CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001, mediante la cual la Curadora Urbana 2 de Bogotá D.C. aprobó el proyecto urbanístico Unir II (Predio hacienda Altamira) y su desarrollo por etapas, identificadas como I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, con fecha de ejecutoria 28 de noviembre de 2001, prorrogada por un término de doce (12) meses mediante Resolución 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, ejecutoriada el 17 de mayo de 2004.
- Resolución 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003, mediante la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. concedió licencia de urbanismo para la etapa VII y licencia de construcción para la manzana 8 de la misma etapa, con fecha de ejecutoria el 30 de octubre de 2003.
- Resolución 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004, por la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C. concedió licencia de urbanismo para la etapa VIII y licencia de construcción para la manzana 9 de la misma etapa, con fecha de ejecutoria 3 de diciembre de 2004.
- Resolución 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, mediante la cual el Curador Urbano 4 de Bogotá concedió licencia de urbanismo para la etapa IX y licencia de construcción para la manzana 10 de la misma etapa con fecha de ejecutoria 29 de diciembre de 2004.

Así entonces, se concluye que ninguno de los actos administrativos señalados puede ser objeto de modificación o prórroga, como quiera que su vigencia expiró, tal como quedo establecido en precedencia.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

De todo lo anterior, y como quiera que se evidencia que el entonces Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., GERMAN RUIZ SILVA al proferir las Resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, vulneró la normatividad urbanística, este Despacho procederá a remitir copia de la presente actuación administrativa para que se investigue su conducta al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

De igual manera, en firme la presente decisión se enviará copia de la misma a la Alcaldía Local de Engativá con el fin de que conforme a su competencia, inicie las actuaciones correspondientes en lo que tiene que ver con el control urbano, de acuerdo a lo previsto en la Ley 810 de 2003.

Finalmente, en relación con la petición efectuada por el señor FÉLIX CULMAN, mediante la cual solicita que de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 11 de octubre de 2002 y confirmada por el H. Consejo de Estado en decisión del 16 de octubre de 2008, se ordene la revocatoria de las licencias de urbanismo y construcción aprobadas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C. para el programa de vivienda UNIR II, es necesario señalar en primer término, que este ciudadano ya había presentado solicitud de revocatoria contra los señalados actos administrativos el 30 de noviembre de 2005, de lo cual da cuenta la Resolución E 06-4-0099 del 3 de marzo de 2006, expedida por el Curador Urbano 4 Encargado de Bogotá D.C., arquitecto Mariano Pinilla Poveda, obrante a folios 533 a 540 de la presente actuación administrativa, en la que resolvieron negativamente sus pretensiones.

En segundo término, los argumentos que sustentan la nueva solicitud de revocatoria presentada por el señor FÉLIX CULMAN, fueron precisamente estudiados en el presente acto, del cual se le remitirá copia para su conocimiento, por lo que en tales condiciones no hay lugar a adelantar una nueva actuación de revocatoria.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la solicitud de revocatoria directa elevada por la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C. contra las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001 y 04-2-0106 del 21 de abril de 2004, expedidas por la Curadora Urbana 2, arquitecta BRIANDA RENIZ CABALLERO, por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden.

[Firma]



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa elevada por la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C. contra las resoluciones 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por el Curador Urbano 4 de Bogotá D.C., arquitecto GERMAN RUIZ SILVA, de conformidad con los razonamientos del Despacho expuestos en los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR y ENTREGAR copia de la presente decisión a la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR y ENTREGAR copia de la presente decisión a los señores MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, CAMPO ELÍAS PEÑA CRUZ, CLARA INES CASTELLANOS DE BOLÍVAR, RAQUEL LANCHEROS, ÁLVARO BARAJAS RINCÓN, SANDRA ELIANA TORRES, FERNANDO MAHECHA RINCÓN, YANETH ROCHA, ROSA VALBUENA, GERMÁN EDUARDO BERNAL, PAULO EMILIO CARDOZO, ELISEO MEDELLÍN VELÁSQUEZ, WILLIAM CASTAÑEDA, EMIRO MAHECHA, ELICEO TIJANO, RAQUEL LANCHEROS, MARÍA LILIA URRIAGO, DELVY ESPERANZA CHAPARRO, NORBERTO ÑUSTES LANCHEROS, TIBERIO MONROY JIMÉNEZ, HECTOR PIRATOVA SÁNCHEZ, YOLANDA YANETH BUSTAMANTE, BARBARA CHÁVEZ, MARTHA YANETH BOLÍVAR, JOSÉ FRANCISCO VALERIANO, GLORIA INES BERNAL, FLOR MARINA BERNAL, ANA ELOISA PALMA GUZMÁN, BETTY LESMES PATIÑO, ALBA LUZ CASTAÑEDA GARCÍA, LUIS ALFONSO RAMOS, HECTOR ORLANDO MALAVER, SIXTA TULIA CÁRDENAS, ADELINA ROMERO, MARÍA ESPERANZA DÍAZ CARRILLO, JUAN DE DIOS DÍAZ, LUIS ALFONSO SALGADO, PEDRO PABLO PARRA PACHÓN, MARÍA CONCEPCIÓN MURCIA DE PARRA, CLAUDIA PATRICIA BOLÍVAR, ÁLVARO DEL CARMEN BARAJAS, GENARO APONTE, JAIME ALDEMAR CHÁVEZ, NESTOR ENRIQUE ROMERO, ANA SILVIA GARZÓN DE GALINDO, MARÍA ELVIRA MONROY, PATRICIA LEÓN, AGUSTÍN LUNA, ELIZABETH VARGAS ROMERO, BLANCA MARLENE GARCÍA, LUZ MARINA DE SILVA, MARIA DELIA PÁEZ, ERINI CRISTO, GLORIA MARÍA PARRA, MARY VILLEGAS, OLIVA CARDOZO CHACÓN, MARÍA FALCONERY RAMOS DE MORA, ARAMINTA NAVARRETE, JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ, MARÍA ETELBINA CASTIBLANCO, MILCIADES QUIÑÓNEZ DÍAZ, PEDRO MARÍA GORDILLO, GUSTAVO CÁRDENAS MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, ODILIA LOZANO, JOSÉ ANTONIO RIVERA, FABIO HERNÁN PIEDRA ROZO, HERMENECIA QUESADA, DANIEL DE JESÚS CABREJO ROLÓN, MARÍA ELISA LÓPEZ y ELPIDIO CASTAÑEDA; JOSÉ ISAÍAS VARELA, SOFÍA GONZÁLEZ LUGO, MARY VILLEGAS RIVERA, MARIELA CANO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR MIRANDA, BERNARDA MORA, LIGIA MARTÍNEZ, GLORIA BOGOTÁ, JULIA MARGARITA BAUTISTA POLANÍA, AGUSTÍN LUNA, JOSÉ HELIODORO CIPRIAN BEJARANO, DELFINA VICTORIA HERNÁNDEZ, PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ, JANETH ESQUIVIA CORTES, BLANCA MARLENY GARCÍA BUITRAGO, CLAUDIA PATRICIA RINCÓN PINEDA, CLAUDIA PATRICIA BOLÍVAR CASTELLANOS, CLARA INES CASTELLANOS, ELIZABETH VARGAS, IMELDA

Handwritten signature



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

RODRÍGUEZ, MARÍA ESPERANZA DÍAZ CARRILLO, MEREJILDO SÁNCHEZ PÉREZ, CECILIA SÁNCHEZ, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ, JORGE DANIEL OCHOA ROJAS, PEDRO PABLO RIVEROS, MANUEL FRANCISCO GONZÁLEZ, VILMA TÉLLEZ BERNAL, ELBA FLOR RODRÍGUEZ FLORÍAN, JORGE ENRIQUE CASALLAS, NESTOR GERMÁN TORRES CASTRO, ARIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ARCENIO ANTONIO GONZÁLEZ, HERLINDA ESTHER PINO TINOCO, MARÍA EMMITA CRUZ, MIGUEL ANGEL SAAVEDRA, JORGE VANEGAS LUNA, MANUEL DAZA HUÉRFANO, MARCO AURELIO CENTENO, FLOR ALBA SÁNCHEZ, VERÓNICA TORRES VILLALBA, ALVARO DEL CARMEN BARAJAS, GUILLERMO ROLDAN CANO, JOSÉ EDITH ZABALA, HUGO HERNANDO VALDERRAMA, JOSÉ EVELINO PINTO, ELISEO TIJARO SAAVEDRA, JAIRO ELVER BOGOTÁ, JOSÉ SANTOS UNBARILA, CANDELARIA ESPITIA, VICTORINO ORTIZ, RAFAEL DANIEL FRANCO PEÑA, JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA, EDGAR BRAVO REYES, FRANCISCO ARTURO TRIANA, ELIODORO BUSTOS, DANIEL JOSÉ BEJARANO, AURELIANO CABREJO ROLÓN, HENRY UBALDO SOSA VARGAS, ROSALÍA DÍAZ RAMÍREZ, ALBA TULIA ÁLVAREZ BUSTOS, GLADYS PULIDO LÓPEZ, GRACIELA CASTRO FAJARDO, SANDRA PATRICIA LEÓN, ADELMO ÁLVAREZ BUSTOS, BLANCA MARLENY GARCÍA, EFRAÍN ALFONSO BELTRÁN, MARTHA CONSUELO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JEFERSON HERNANDO SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ PEDRO LARA ROJAS, SANDRA LILIANA CLAVIJO MELÉNDEZ, GUSTAVO QUEMBA TÉLLEZ, CLARA INÉS CASTELLANOS DE BOLÍVAR, JOSÉ CAMILO DUARTE BARRERA, JUSTINA HOYOS VDA DE VALENCIA, SANDRA PATRICIA LEÓN, FERNANDO GORDO y JOSÉ ARNEY RAMÍREZ; JOSÉ LÓPEZ MENDOZA, RAFAEL YEPES, MARÍA RUTH GÓMEZ DE MARTÍNEZ, MARÍA EMMA CELIS, ANA ROSA LÓPEZ VELÁSQUEZ, EDELMIRA MENDIVELSO, EDGAR ROMERO BACCA, LUIS ALBERTO LÓPEZ GARAY, LUIS ALBERTO ÁRIAS, MARÍA DEL CARMEN REYES, JOSÉ ARNEY RAMÍREZ, HERCILIA ROJAS BELTRÁN, ESTEBAN GILBERTO DÍAZ LINARES, MARÍA DE LA CRUZ OSORIO, EMMA ZULUAGA DE ZULUAGA, JAIR TORRES CARVAJAL, ORFILIA RUEDA SÁNCHEZ, WILMER FERNANDO SÁNCHEZ RAMÍREZ, NORBERTA NUSTES LANCHEROS, MARÍA FLOR ELISA QUIROGA CHÁVEZ, MARLENY CASTIBLANCO, MARÍA ELIZABETH GÓMEZ BLANCO, NUBIA JANETH MOLANO RICO, LUZ MERY RUIZ SUÁREZ, LUZ MARTHA SERRANO CONTRERAS, MARÍA ISOLINA GÓMEZ DE SALAMANCA, ROSA MARÍA REYES SALDAÑA, MARÍA DELIA PÁEZ NIÑO, ROBERTO LEAL VARGAS, JOSÉ HERNANDO CASAS ROJAS, MARTHA CECILIA DÍAZ GONZÁLEZ, ROSA ISMENIA VILLABONA, YOLANDA OTERO RIVERA, MARÍA GILMA MUÑOZ SAENZ, MARIO ALFONSO SÁNCHEZ, JOSÉ CAMILO DUARTE BARRERA, MARÍA CUSTODIA RÍOS DE GÓMEZ, ROSA HELENA LÓPEZ, GONZALO QUINTERO GUALTEROS, FABIO LEONARDO BARINAS CAÑÓN, BLANCA HILDA SABOYA LÓPEZ, BLANCA EDILMA SABOGAL DE RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR JUNCO SANABRIA, EDITH MANUELA CHIPATASIG GARCÍA, CIRO ALBERTO AGUDELO FUENTES, MARÍA AIDEE SIERRA BERNAL, VIDAL VIASUS CIPAMOCHA, ALBA ISABEL GARAVITO MARTÍNEZ, ARMANDO INFANTE, MARDOQUEO SALVADOR LINARES PEÑA, LUZ HERMINDA TORRES GONZÁLEZ, OSTIN JULIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ, LIDIA AMPARO CABRERA CIFUENTES, CONCEPCIÓN FORERO CASAS, MARÍA EDILMA GARCÍA, ANTONIO ASTUDILLO MORA, IVAN ANTONIO ACOSTA RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO ACERO CAMACHO, OLIVERIO GÓMEZ RÍOS, ROSALBA ROZO GONZÁLEZ, MARÍA



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones CU2-2001-295 del 26 de noviembre de 2001; 03-4-0587 del 16 de octubre de 2003; 04-2-0106 del 21 de abril de 2004; 04-4-1091 del 18 de noviembre de 2004 y 04-4-1137 del 7 de diciembre de 2004, expedidas por las Curadurías Urbanas 2 y 4 de Bogotá D.C.

RAQUÉL DURÁN DE BARRETO y ROSA HELENA CAMACHO PULIDO, indicándoles que contra ella no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente al doctor VÍCTOR EDUARDO MEDINA JOHNSON apoderado de la Caja de Vivienda Popular, como Agente Especial para la administración o liquidación de los negocios, bienes y haberes de MARIANO ENRIQUE PORRAS BUITRAGO, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SEXTO: ABSTENERSE de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, como quiera que dicha actuación fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el H. Consejo de Estado con ocasión del fallo de la Acción Popular 02-2514-01 del 14 de junio de 2006.

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR la presente decisión a la Alcaldía Local de Engativá con el fin que conforme a su competencia, adelante las actuaciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR copia de la presente decisión al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para que se investigue la conducta del arquitecto GERMAN RUIZ SILVA, entonces Curador Urbano 4 de Bogotá D.C.

ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia de la presente decisión al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección B Tribunal, para su conocimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO: REMITIR la presente decisión a las Curadurías Urbanas 1, 2, 3, 4 y 5 de Bogotá D.C. para su conocimiento.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: REMITIR copia de la presente decisión al señor FELIX CULMAN, para su conocimiento, conforme lo dispuesto en la parte considerativa.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a 5 FEB. 2009


OSCAR ALBERTO MOLINA GARCÍA
Secretario Distrital de Planeación

Vo. Bo.
Revisó:
Proyectó:

Beatriz Helena Prada Vargas – Subsecretaria Jurídica
Clara del Pilar Giner García – Directora de Trámites Administrativos
Eduardo Fernández Franco.